

Título: Nuevas formas de participación democrática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercidas por las víctimas de violencia doméstica

Autor: Marotta, Julieta

Publicado en: DFyP 2019 (junio), 28/06/2019, 8

Cita Online: AR/DOC/1496/2019

Sumario: I. Introducción.— II. Metodología.— III. Resultados.— IV. Observaciones comparativas.— V. Reflexiones finales.

(*)

I. Introducción

La participación democrática es un derecho reconocido a las personas. Este derecho es mencionado en varias constituciones nacionales y proporciona mecanismos de comunicación entre las personas y el Estado. El derecho a la participación democrática es una consecuencia de la distribución del poder y contempla las posibilidades que tienen las personas para expresarse como miembros de la sociedad, a través de su participación en el proceso de políticas públicas. El ejercicio del derecho a la participación democrática es, en cierto modo, inherente a las personas legalmente empoderadas, ya que solo aquellos que tienen el poder de conocer y comprender los mecanismos legales para participar, podrán ejercer este derecho.

El empoderamiento legal es una forma de entender el acceder a la justicia que se centra en las capacidades de los individuos y que valora la participación activa de las partes en la búsqueda de soluciones a sus conflictos, dándoles control sobre sus problemas (1). Es un enfoque no ortodoxo de acceso a la justicia (2) que fortalece las posibilidades y libertades individuales. El proceso de empoderamiento legal afirma que las normas pueden contribuir a aumentar la participación de la sociedad en el proceso de políticas públicas, a través de la implantación de normas que aumenten la autonomía de las partes en la toma de decisiones, su autosuficiencia, y el aprendizaje sobre los mecanismos de participación social (3). Se asume que la evolución de las normas para garantizar la participación democrática puede contribuir a la participación real de las personas. Sin embargo, para que tal relación ocurra, las normas deben proporcionar mecanismos adecuados para que las personas se puedan expresar en el proceso de políticas públicas (4).

USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) propuso en 2007 un marco para medir el concepto de empoderamiento legal. USAID sugiere que el empoderamiento legal tiene cuatro componentes con una relación cíclica (5). Los cuatro componentes son: avances en la norma, conocimiento de los derechos, la posibilidad de accionar los derechos, y la ejecución de los derechos. Los avances en la norma incorporan la evolución de la norma y la creación de organizaciones legales a fin de proporcionar canales para que los grupos vulnerables puedan influenciar el proceso de políticas públicas (6). El conocimiento de los derechos representa el componente cognitivo del marco y estudia los medios disponibles para que aquellos que buscan justicia reconozcan la existencia de sus derechos y las formas de ejercerlos (7). Este componente es considerado el basamento del empoderamiento legal (8). La posibilidad de accionar los derechos incluye los mecanismos disponibles para ejercer y hacer uso efectivo de los derechos. La ejecución de los derechos estudia las normas que abordan cómo las personas pueden ejercer sus derechos. Asimismo, la ejecución contempla mecanismos de aplicación efectiva de la norma a una situación (9). La relación cíclica entre los componentes afirma que las personas legalmente empoderadas aumentan su participación democrática convirtiéndose, eventualmente, en miembros de movimientos bottom-up que participan en el diseño de políticas públicas. El enfoque de empoderamiento legal posiciona al derecho a la participación democrática como una consecuencia importante del empoderamiento, ya que asume que aquellos empoderados tenderán a participar en el proceso de políticas públicas (10).

Se trata de un derecho fundamental a garantizar, ya que es una condición necesaria para el empoderamiento legal. Representa los mecanismos y herramientas proporcionados a las personas para acceder formalmente a participar e influir en el proceso de políticas públicas. Asimismo, este enfoque reconoce las vulnerabilidades de las personas y reclama la implementación de mecanismos adecuados para que estos grupos tengan la posibilidad de influenciar las políticas públicas (11). Esta participación asegura que las necesidades de los grupos vulnerables estén representadas en las normas. La participación en el proceso de políticas públicas se considera posible si las personas pueden entender y contar con los canales para participar, por lo tanto, si están legalmente empoderadas para participar.

Estudios previos sobre el empoderamiento legal identifican en las normas la capacidad de cambiar el comportamiento y, por lo tanto, de otorgar "poder legal" a los grupos vulnerables (12). El presente estudio parte de dicho supuesto y utiliza datos empíricos para comprender: ¿cómo el acceso a la justicia puede mejorar la participación democrática? Para responder a la pregunta de investigación, este estudio primero presenta los

avances en las normas sobre participación democrática. Este estudio luego utiliza entrevistas para comprender cómo perciben esos avances las mujeres víctimas de violencia doméstica (en adelante, víctimas).

II. Metodología

Este trabajo utiliza el método de estudio de caso para comprender el fenómeno social de la participación democrática de las víctimas que obtuvieron acceso a la justicia. Aborda la evolución de la legislación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, Buenos Aires) desde 1996, año en que se promulgó la Constitución de Buenos Aires (en adelante, Constitución de la Ciudad). Asimismo, este estudio utiliza entrevistas para entender si las víctimas reconocen, y de qué modo lo hacen, estas nuevas formas de participación democrática. Las entrevistas se realizaron en el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires (en adelante, Ministerio Público Fiscal) a aquellas víctimas que accedieron con una denuncia categorizada como de violencia doméstica. Las víctimas fueron seleccionadas como ejemplo de un grupo vulnerable que ha adquirido atención pública y política, mediante la promulgación de leyes integrales y la creación de organizaciones legales para asistirles en su acceso a justicia. Las entrevistas ayudaron a comprender qué mecanismos formales e informales utilizan las víctimas para hacer cumplir su derecho a la participación democrática.

II.1. Expectativas teóricas

Este estudio trabaja sobre expectativas teóricas provenientes de la literatura sobre empoderamiento legal y adopta un enfoque deductivo-inductivo. Toma como punto de partida el anteriormente mencionado marco teórico propuesto por USAID para medir el empoderamiento legal, así como a los principales autores que trabajaron en la comprensión de este fenómeno. Este estudio complementa los enfoques teóricos con hallazgos empíricos.

El estudio analiza los avances en los derechos que abordan la falta de poder, oportunidades y capacidades de los grupos vulnerables para comprender en qué medida las normas proporcionan una configuración que permite el empoderamiento legal (13). Esto se asume a partir de la relación de poder desigual entre las víctimas y las normas, las organizaciones legales y los acusados (14). Las normas que abordan esa relación se consideran para mejorar el empoderamiento legal. Asimismo, se entiende que las normas son beneficiosas cuando incluyen disposiciones para garantizar la consulta a las víctimas sobre sus problemas, eliminando aquello que obstaculiza el ejercicio de sus derechos (por ejemplo, legislar sobre desigualdad de género y prejuicios y legislar en favor de la simplicidad de las normas para garantizar que puedan ser conocidas y entendidas por los grupos vulnerables) (15).

Se considera que el avance en las normas para mejorar el acceso a la justicia por parte de grupos vulnerables contribuye al empoderamiento legal, ya que esto solo es posible cuando a las personas se les otorga acceso a un sistema judicial que "funciona correctamente" (16). Por lo tanto, las normas que tienen como objetivo superar los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia y al ejercicio de los derechos (por ejemplo, costos, demoras, falta de transparencia) también se consideran una contribución al empoderamiento legal (17). Las normas que contemplan la participación de las partes en los procedimientos legales aumentan las posibilidades de que las personas mantengan el "control" sobre los conflictos y así arriben a una resolución adecuada (18). Al mismo tiempo, la creación de organizaciones estatales confiables amparadas por la legislación es de vital relevancia, ya que habitualmente los grupos vulnerables no confían en las organizaciones estatales (19). Lo mismo ocurre con las normas que abordan la calidad del servicio dado por los proveedores, como un medio para garantizar que los grupos vulnerables hagan cumplir sus derechos (20). Las normas procesales se consideran relevantes en este contexto, dado que aseguran la implementación de la norma sustantiva (21).

Se espera que las normas que incorporan aspectos para asegurar el conocimiento de los derechos por parte de grupos vulnerables (por ejemplo, la incorporación de terminología legal simple) contribuyan al empoderamiento legal (22). Esto es así porque se reconoce una relación entre el conocimiento de los derechos y su posible ejercicio. Por lo tanto, se considera importante que las normas contemplen los obstáculos que enfrentan los grupos vulnerables para conocer sus derechos e incluyan formas para superarlos (23).

Las normas que incorporan mecanismos para ofrecer a las personas la posibilidad de accionar sus derechos podrían otorgar opciones concretas de acceso a la justicia teniendo en cuenta los obstáculos que enfrenta la población. Se considera que este enfoque aumenta las oportunidades de empoderamiento legal (24). Lo mismo sucede cuando las normas incorporan medidas para sortear los obstáculos a la hora de acceder a la justicia (por ejemplo, distancia física, horarios de atención, costos, demoras, complejidades en el sistema judicial y en el procedimiento legal, obstáculos socioculturales) (25) y cuando las normas tienen en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables y proporcionan opciones procesales para contribuir al ejercicio de sus derechos (26). En última instancia, estas incorporaciones a las normas proporcionarían los canales y entornos adecuados para que los grupos vulnerables influyan en el proceso de políticas públicas (27).

Las normas que brindan oportunidades para que los grupos vulnerables ejecuten sus derechos contribuyen al empoderamiento. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las normas incluyen disposiciones para limitar los plazos de accionar por parte de los proveedores judiciales; cuando se mejora el acceso a las organizaciones estatales a través, por ejemplo, de números telefónicos gratuitos, figuras como los defensores del pueblo, o mecanismos alternativos de resolución de conflictos; y, garantizan la flexibilidad para que las organizaciones legales trabajen con las partes en la búsqueda de soluciones (28). Del mismo modo, y en vistas de mejorar la participación, se considera que el avance en las normas contribuye al empoderamiento legal de las personas cuando se dan opciones para responsabilizar a los proveedores judiciales por su servicio, comprendiendo que la transparencia y la rendición de cuentas también ayudan a la igualdad de derechos (29).

II.2. Análisis normativo

Este estudio se centra en las normas aplicables a Buenos Aires. Se selecciona esta jurisdicción porque representa una reforma interesante del sistema judicial, a menudo considerada necesaria en Argentina (30), y porque cuenta con la constitución más reciente del país.

Las normas aplicables se estudian siguiendo la estructura jerárquica incorporada por la Constitución de la Nación Argentina (es decir, 1ra. ley constitucional, 2da. ley federal, 3ra. ley de Buenos Aires) (31). El derecho constitucional incluye la Constitución de la Nación Argentina (Constitución Nacional) y los tratados de derechos humanos. La Constitución Nacional ofrece las premisas de valor bajo las cuales se forma la sociedad argentina. Los tratados de derechos humanos, incorporados en la Constitución Nacional en 1994 (32), reconocen y amplían los derechos de las personas. El ámbito federal está representado principalmente por la ley 26.485 que ofrece protección integral a las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Las legislaciones integrales son desarrollos legislativos recientes que tienden a abordar los derechos de grupos particulares en lugar de los derechos de toda la sociedad. Una tendencia similar puede percibirse con respecto a los tratados de derechos humanos. La ley 26485 también describe nuevas tendencias en los enfoques holísticos, ofreciendo una solución integral a un grupo específico. La ley también incorpora principios y estándares establecidos por los tratados de derechos humanos (33). Las regulaciones recientemente adoptadas para Buenos Aires también se abordan en este estudio. Ejemplos de estas regulaciones se encuentran en la Constitución de la Ciudad y en el Código Procesal Penal de Buenos Aires de 2007. El ámbito de Buenos Aires también representa una reforma interesante del sistema judicial, a menudo considerada necesaria en Argentina (34). Se otorga al Ministerio Público Fiscal autonomía funcional y autarquía dentro del sistema judicial, con la capacidad de redactar sus propios reglamentos internos (35). Las regulaciones internas son importantes porque convierten los principios establecidos en las normas generales en un conjunto más concreto de acciones que los proveedores deben implementar para garantizar el ejercicio de los derechos.

II.3. Análisis empírico

El estudio comprende entrevistas realizadas a víctimas que obtuvieron acceso al Ministerio Público Fiscal con denuncias clasificadas como delito de violencia doméstica (36). Las entrevistas se llevaron a cabo entre 2012 y 2014. Las víctimas fueron entrevistadas dos veces, con un intervalo de seis meses. El muestreo está compuesto por cincuenta y cuatro víctimas, de las cuales treinta y una fueron entrevistadas dos veces. Las muestras se seleccionaron al azar para incluir representantes de las víctimas que se acercaron al Ministerio Público Fiscal, independientemente de sus características personales (por ejemplo, género, edad, educación, ingresos). Por lo tanto, se puede considerar que la muestra representa a la población que visita el Ministerio Público Fiscal (37). Las víctimas fueron entrevistadas en el Ministerio Público Fiscal y tuvieron lugar durante una estancia de investigación de 43 días. Durante esta estancia se entrevistaron a todas las víctimas que tenían una cita con la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigo del Ministerio Público Fiscal y que aceptaron voluntariamente participar en el estudio. Se invirtió una cantidad igual de tiempo en cada una de sus unidades descentralizadas, cubriendo los cinco días laborales de la semana en cada unidad.

Se utilizó el método de preguntas abiertas y no dirigidas para capturar la realidad sin influir. Las víctimas fueron entrevistadas para comprender cómo percibían su acceso a la justicia y qué actividades habían realizado después de dicho acceso (38).

Este estudio hace uso de los datos recopilados por expertos de Australia, Canadá, Francia y EE.UU. y de iniciativas políticas públicas de la India, los Países Bajos, Perú y España. La justificación para la selección de estas jurisdicciones fue obtener lecciones comparativas de expertos que trabajan para organizaciones legales en algunas de las jurisdicciones que han demostrado compromiso en la comprensión empírica del acceso a la justicia (por ejemplo, a través de encuestas nacionales, centros de investigación) (39). Francia es una excepción y fue seleccionada por su tradición en la lucha por los derechos de las mujeres a través de movimientos bottom-up y en la incorporación del Ministerio de la Mujer a su estructura gubernamental. Cabe señalar que, pese a no

estar incluido en este estudio, el Reino Unido también ha demostrado un compromiso temprano en la comprensión empírica del acceso a la justicia.

Los análisis de datos siguieron un enfoque de análisis de contenido (40). Las entrevistas fueron codificadas temáticamente por categorías preseleccionadas y categorías que se crearon durante el proceso de codificación (41). Este estudio siguió un enfoque deductivo al principio, comenzando con los códigos principales que derivaban de las matrices (42), seguido de un enfoque inductivo que daba como resultado nuevos códigos que derivaban de los datos. Además, el análisis de los datos consideró la importancia de ciertas palabras en el discurso de los entrevistados, la interacción de los diferentes factores presentados por los entrevistados, la interacción y las contradicciones entre esos factores y la enumeración de elementos considerados relevantes para ciertos temas. Se utilizó NVivo para analizar sistemáticamente los datos y sirvió como una herramienta para recuperar diferentes códigos y analizarlos en diferentes etapas del estudio. Además, los atributos personales (por ejemplo, edad, lugar de nacimiento) se vincularon a fuentes empíricas para cruzar los resultados con las características de los entrevistados.

III. Resultados

III.1 La norma y su aproximación a la participación democrática

Esta sección presenta el avance de las normas a nivel federal y a nivel local. Analiza cómo las constituciones incorporaron disposiciones para mejorar el derecho a la participación democrática. Se analiza la norma en vista del marco teórico de empoderamiento legal.

III.1.a. Nivel federal

La Constitución Nacional introdujo la palabra "democracia" en su texto de 1957, al incorporar el derecho de los empleados a sindicalizarse libre y democráticamente (43). El art. 36 establece desde 1994 que el "sistema democrático" prevalecerá sobre los gobiernos de facto y los enriquecimientos ilícitos (44). Los partidos políticos también se incorporan a la Constitución Nacional como instituciones clave para garantizar el sistema democrático. La Constitución Nacional exige que los partidos políticos se organicen y funcionen democráticamente (45). Además, el Congreso tiene la capacidad de "sancionar leyes de organización y de base de la educación [...] que aseguren [...] la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna" (46) y de aprobar tratados de integración solo si respetan el orden democrático (47).

Argentina adopta una forma representativa de gobierno (48); y "el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por [la] Constitución" (49). Las personas pueden participar en actos políticos ejerciendo su derecho al voto, su derecho a constituirse y a formar parte de un partido político, y su derecho a reunirse y manifestarse (50). Se otorgará igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (51) para acceder a candidaturas electivas y de partidos políticos (52). Las acciones positivas son reconocidas por la Constitución Nacional como una forma de otorgar igualdad de oportunidades (53).

El derecho al voto, que es universal, igualitario, secreto y obligatorio (54), otorga a cada ciudadano la posibilidad (y la obligación) de elegir a sus representantes y así ejercer sus derechos políticos. Los partidos políticos son considerados medios para garantizar la participación democrática porque actúan como conectores entre la gente y el poder político (55). Están destinados a representar la voluntad política de una sociedad diversa, y su derecho de libre creación y actividades solo está limitado por la Constitución Nacional (56). El Código Electoral Nacional, sancionado en 1983, diseña el sistema electoral siguiendo la representación proporcional (57). El derecho a la participación democrática puede ejercerse si las personas conocen las opciones y derechos disponibles. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, el voto en Argentina es obligatorio (58). Es un deber más que un derecho (59), y el Estado ha logrado que la población conozca este deber. Los ciudadanos conocen este deber porque, antes de las elecciones, se realizan importantes campañas electorales (60) que incluyen anuncios en las calles, la visita de los partidos políticos a diferentes vecindarios, y a los medios de comunicación. Aquellos que no cumplen con el deber de votar pueden ser sujetos a una sanción monetaria y la posibilidad de no poder asumir funciones públicas durante tres años (61). A este efecto, se crea un registro para los infractores (62), y los ciudadanos pueden verificar en Internet si figuran como infractores del deber del voto (63). El Estado ha logrado que la población conozca sobre su deber de votar, pero no se ha dado similar énfasis a que conozcan las otras formas de participación democrática. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) incluye los derechos y oportunidades de los ciudadanos para participar en el gobierno. Los elementos otorgados por esta convención para permitir el derecho a la participación democrática en el gobierno incluyen el derecho a ser elegido y a elegir libremente a través del voto (64).

La Constitución Nacional introdujo en 1994 la participación democrática semidirecta (65) y la consulta popular (66). Estas formas fortalecen la comunicación entre los representantes y las personas, y le dan a estas

última otra herramienta constitucional para participar en el proceso de políticas públicas. La primera forma brinda a las personas la oportunidad de comunicarse con los representantes, mientras que la segunda otorga a los representantes la oportunidad de comunicarse con las personas. La participación semidirecta ofrece a los ciudadanos la posibilidad de presentar proyectos de ley al Congreso sobre cualquier asunto, excepto aquellos relacionados con la reforma constitucional, los tratados internacionales, los impuestos, el presupuesto y las cuestiones penales. El Congreso tiene el deber de considerar los proyectos de ley dentro de un plazo de doce meses (67). La consulta popular se puede hacer por iniciativa del Congreso, y los proyectos de ley se convierten en leyes si reciben el voto afirmativo de la gente. Asimismo, el Congreso o el presidente argentino pueden presentar proyectos de ley no vinculantes para consultas populares (68). Estas normas brindan a las personas la oportunidad de tener una participación democrática al acceder a la legislatura con sugerencias legislativas.

Los canales para la participación social son relevantes como un medio para dar voz a las necesidades y, en consecuencia, aumentar la calidad y la eficacia de las políticas públicas. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reafirma el derecho de las personas a participar en el proceso político de sus Estados. La comunicación con el gobierno está reconocida en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como directa o por medio de sus representantes, y se considera que las elecciones libres y transparentes desempeñan un papel fundamental (69).

El principio de publicidad de los actos gubernamentales también es valioso para asegurar el conocimiento de la norma, y tiene su fundamento en la forma republicana de gobierno introducida por el art. 1º de la CN. Los tratados de derechos humanos explícitamente llaman al principio de publicidad de las actividades del sistema judicial, como ser, los procedimientos penales y las decisiones judiciales (70).

El art. 14 de la CN incorpora un principio más general al mencionar el derecho de las personas de enseñar y aprender (71). Este derecho ha gobernado el país desde 1853, mostrando la importancia que se asigna a la educación. La Constitución Nacional lo considera necesario para lograr una democracia sólida (72). Además, el art. 75 (73) establece que la Cámara de Diputados deberá "sancionar leyes [...] que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna [...]" (74). Este artículo, por lo tanto, presenta las atribuciones otorgadas a la Cámara de Diputados para legislar en vistas del desarrollo humano. Al mismo tiempo, el artículo otorga al sistema educativo un papel primordial para fomentar los valores de democracia, igualdad de oportunidades, no discriminación y responsabilidad. Estos principios están actualmente ampliados por los tratados de derechos humanos (75).

Directamente vinculado al derecho a la educación está el derecho a la información, porque es la educación la que habilita a las personas a utilizar la información para un determinado fin. La educación habilita el uso de las libertades individuales; "una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana" (76). También se destaca la importancia de garantizar el derecho a la información como una herramienta para la participación libre de las personas en la sociedad (77). El derecho a la información se considera estrechamente relacionado con el reconocimiento de otros derechos que les permiten a las personas tomar decisiones informadas y en forma libre (78). El ejercicio del derecho de participación democrática, dentro del enfoque de empoderamiento legal, considera la información como un medio para crear conocimiento y motivar el deseo de participar. La información y el conocimiento pueden crear así el deseo de participar en el cambio social utilizando las herramientas democráticas disponibles. Algunos académicos consideran el derecho a la información implícitamente reconocido en el art. 33 de la CN, ya que ese artículo reconoce los derechos que se derivan de la soberanía del pueblo (79).

La Constitución Nacional reconoce el derecho a asociarse libremente con "fines útiles" (80). Además, reconoce la importancia de otorgar igualdad de oportunidades a las personas y las sociedades civiles para asociarse libremente, adquiriendo así otros medios de expresión (81). El Estado tiene el deber de brindar oportunidades para que surjan asociaciones, evitando la discriminación. El principio de libre asociación es importante dentro del marco de empoderamiento legal porque reconoce la importancia de la agrupación (es decir, la reunión) de personas con intereses similares para motivar la participación democrática.

La Constitución Nacional otorga el derecho a las personas de "peticionar a las autoridades", quienes están obligadas a proporcionar una respuesta (82). Ese artículo protege el derecho a la libertad de expresión. Este derecho se percibe como un medio para facilitar y estimular el proceso democrático, porque mejora y permite el debate sobre asuntos de interés público. La libertad de expresión también facilita el debate sobre las diferentes opciones políticas disponibles, estimulando el juicio propio y la selección, o propuesta de ideas, para mejorar la esfera pública (83).

A nivel federal, se introdujeron medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en su participación democrática (84). Por ejemplo, en 1991, se introdujo la ley 24.012 que exige que las listas de

candidatos incluyan una representación del 30 por ciento de mujeres (85). Esta ley está en línea con la Constitución Nacional, que exige "la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios [...] por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral" (86). En 2001, la Cámara Nacional Electoral concluyó que la acción positiva no estaba destinada a existir en detrimento del derecho a la igualdad de oportunidades para los hombres, sino a permitir que la segunda persona que se postula para un cargo político sea de un género diferente al del primer candidato (87). El número de mujeres en el sistema judicial aumentó con la implementación de acciones positivas (88). En 2017, se modificó el Código Electoral Nacional con una ley de cuotas para paridad de género en el ámbito de representación política (89). Esta ley garantiza que la lista de candidatos a legisladores del Mercosur "deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones".

El estado de la cuestión parece indicar una falta de normas específicas para que las personas hagan cumplir su derecho a la participación democrática. Sin embargo, iniciativas como las leyes de cuotas de género pueden contribuir a una representación democrática y, por lo tanto, facilitar el ejercicio del derecho a la participación democrática de todos los miembros de la sociedad (90).

La Constitución Nacional introduce mecanismos de rendición de cuentas (es decir, juicio político) para que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus actos. Estos mecanismos buscan reducir los abusos de poder. Los juicios políticos son públicos, debido a la prevalencia del interés público por sobre el derecho a la privacidad de los funcionarios (91).

El dec. 1172/2003 del Poder Ejecutivo apunta a fortalecer la relación entre el ejecutivo y la sociedad civil. Una comunicación fluida entre la administración pública y la sociedad civil es necesaria para desarrollar reformas institucionales con vistas a una democracia transparente, eficiente y legítima. Conforme el dec. 1172/2003 del Poder Ejecutivo, la comunicación mejora cuando se garantiza el principio constitucional de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de las personas a obtener acceso a la información pública (92). El acceso a la información pública también se considera necesario para que las personas puedan exigir a las autoridades que se responsabilicen por sus actos [por ejemplo, controlar la corrupción (93)]. Las audiencias públicas se presentan como un espacio donde las personas pueden participar en sus áreas de interés presentando opiniones, experiencias y conocimientos, individual o colectivamente (94). Las opiniones presentadas durante las audiencias públicas no son vinculantes, aunque serán consideradas adecuadamente, debiendo la autoridad pertinente fundamentar sus desestimaciones. El procedimiento para las audiencias públicas respeta los principios de igualdad, publicidad, oralidad y debe ser informal y libre. Sin embargo, para solicitar una audiencia pública, las personas deben registrarse y presentar una solicitud por escrito que exprese los puntos a tratar y adjuntar documentación pertinente.

La ley 26.485 reconoce la importancia de informar a las víctimas sobre el procedimiento legal y, por lo tanto, promueve una participación activa (95). Es función de los proveedores que asisten a las víctimas en todas las instancias del procedimiento, informarles sobre sus derechos y las organizaciones disponibles, dónde y cómo obtener asistencia en el procedimiento, y cómo preservar la prueba (96). Estos tipos de normas son importantes dentro del marco del empoderamiento legal debido a su potencial para aumentar la participación de grupos vulnerables. Tomar conocimiento de los derechos y las opciones podría fomentar también la formación de opiniones y el deseo de cambio. Estos deseos de cambio pueden impulsar movimientos bottom-up que sugieran cambios a fin de cumplir mejor con las necesidades de los diferentes grupos. Sin embargo, esta forma de participación no se utiliza a menudo.

Se introdujeron algunas figuras legales en un intento por reducir el poder del presidente argentino y fortalecer la democracia. Algunos ejemplos son la inclusión de: (i) el jefe de gabinete de ministros (97), que coordina a los ministros y está subordinado al presidente y al Congreso (98); (ii) el defensor del pueblo que sirve como herramienta para que las personas obtengan voz dentro del sistema democrático (99); (iii) la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia creada bajo el jefe del gabinete de ministros para coordinar, entre otros, los procedimientos de las audiencias públicas y el acceso a la información pública (100); y (iv) el juicio por jurado, percibido como otra forma de democratizar el sistema judicial, porque favorece la integración de las personas con el sistema judicial e impulsa la comprensión de la ley por parte de la población mediante la reducción de la tecnicidad legal innecesaria y la burocracia procesal (101).

III.1.b. Nivel local

La Constitución de la Ciudad incluye el término "democracia participativa" para describir la forma de gobierno adoptada por la Ciudad (102) y afirma que "todos los actos de gobierno son públicos" (103). Existe, como se aborda en el texto, una relación directa entre democracia-participación-promoción de actos gubernamentales. Las normas a nivel local fueron desarrolladas para brindar a las personas mayores oportunidades de participar en el ámbito político, por lo tanto, orientadas hacia la participación. Las personas

pueden participar a través de: (i) el voto (104), (ii) la posibilidad de ser miembro o de establecer un partido político (105), (iii) el derecho a ser elegido (106), (iv) el derecho a solicitar la revocación del poder de quienes los representan (es decir, responsabilizar a los representantes por sus actos) (107) y (v) el derecho a presentar proyectos de ley ante el Congreso de Buenos Aires (108). Algunos autores consideran que la inclusión de estas normas en los derechos políticos y la participación ciudadana convierte al electorado en un cuarto poder (109).

La Constitución de la Ciudad incorpora el juicio por jurado al adoptar el sistema adversarial (110). Sin embargo, el Código Procesal Penal de Buenos Aires no incorpora el juicio por jurado, aunque se propuso en proyectos anteriores (111). La no incorporación del juicio por jurado en el código ha sido objeto de críticas. Algunos autores afirman que la no incorporación refleja que el Código Procesal Penal de Buenos Aires aún conlleva ideales antidemocráticos e inquisitoriales que contradicen el espíritu general del texto (112).

La sección de la Constitución de la Ciudad sobre los derechos políticos y participación ciudadana refuerza el valor de la democracia participativa y reconoce a los partidos políticos como la manifestación del derecho fundamental de libre asociación. Por lo tanto, los partidos políticos son percibidos como el principal canal por el cual se expresa la voluntad popular. Buenos Aires contribuye a la sostenibilidad de los partidos políticos mediante la asignación continua de recursos económicos; apoyando así al diseño democrático. Se solicita a los partidos políticos que destinen un porcentaje de los recursos económicos que les fueron asignados al desarrollo de capacidades y a la investigación. Los partidos políticos también están obligados a hacer público el origen y el destino de su presupuesto y patrimonio. Existe una cantidad limitada, establecida por ley, sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos durante las campañas políticas y cuánto pueden durar dichas campañas (113). Esta política promueve la competencia leal entre los partidos. Buenos Aires también otorga el pleno ejercicio de los derechos políticos (inherentes a la ciudadanía) de acuerdo con la forma de gobierno adoptada por Argentina: republicana, democrática y representativa (114).

La Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a comunicarse, solicitar, difundir y recibir información libremente. Al mismo tiempo, reconoce el derecho de expresión utilizando cualquier canal de comunicación (115), dando relevancia a los medios de comunicación (116) y a Internet. Este último canal se ha convertido en una fuente importante para difundir información sobre el derecho de las personas a participar en las decisiones gubernamentales (117) y a comunicarse con el ejecutivo (118). La ley 104 sobre el derecho a la información destaca la importancia de hacer pública la información (119). Además, la ley garantiza el derecho de las personas a solicitar y recibir información de las organizaciones (120). Esa información debe ser completa, adecuada, oportuna, precisa (121) y estar disponible (122). El uso de este derecho también puede ofrecer mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas: dos importantes mecanismos para la participación democrática.

Se recomienda la comunicación entre el electorado y la administración pública porque fomenta la implementación de políticas que expresan las necesidades comunes de la sociedad (123). Para este propósito, la Constitución de la Ciudad crea el Consejo de Planeamiento Estratégico (124) que consulta a diferentes organizaciones estatales registradas sobre asuntos de políticas públicas (125) y puede presentar proyectos de ley ante la legislatura (126). Los representantes también cuentan con mecanismos alternativos para comunicarse con la comunidad y la legislatura, y a su vez, el ejecutivo de la Ciudad, junto con las Comunas, pueden solicitar audiencias públicas para debatir asuntos de interés general (127). Las personas que deseen participar en audiencias públicas, programadas y disponibles online, deben registrarse con anticipación. Los participantes, cuando lo requieran, tienen el derecho de presentar sus argumentos e ideas, que son de carácter no vinculante (128). El electorado, además, puede ser consultado a través de referendos obligatorios en asuntos relacionados con la sanción, enmienda o derogación de disposiciones (excluidos los tratados y aquellas disposiciones que requieren una mayoría absoluta para su aprobación) (129). La legislatura y el ejecutivo de la Ciudad, junto con las Comunas, pueden solicitar consultas populares no obligatorias en asuntos que recaigan bajo sus competencias. Las personas no están obligadas a votar en este último escenario. Finalmente, las Comunas ponen a disposición, en sus sitios web, formas para que las personas participen en los proyectos que se seleccionarán (130). Aunque esta iniciativa está intencionalmente destinada a aumentar la participación democrática de las personas, puede volverse selectiva si la oportunidad de utilizar la herramienta provista (por ejemplo, Internet) no se vuelve visible, accesible y útil. Por lo tanto, la pregunta que debe abordarse es si Internet, como canal de comunicación, es realmente un medio que llega a todos.

Buenos Aires ha introducido estrategias innovadoras para permitir la participación democrática, más allá de las iniciativas mencionadas anteriormente. Algunas de las estrategias son: (i) la proximidad de los edificios públicos (a través de la descentralización); (ii) plataformas electrónicas donde las personas pueden comunicarse con la Ciudad; (iii) mesas barriales, creadas en 2011, que involucran a la comunidad en sus esfuerzos para combatir la violencia y los delitos, consultándoles sobre el diseño y la implementación de políticas públicas de

seguridad (131); y (iv) terminales ubicadas en estaciones del subterráneo donde las personas, mientras esperan el tren, pueden presentar, entre otras cosas, reclamos y solicitudes de citas para presentar reclamos (el mismo servicio está disponible online) (132). Los reclamos y su seguimiento también pueden realizarse mediante la descarga de una aplicación (133), por teléfono (marcando 147) o en Facebook (134).

Corolario, el ejercicio del derecho al voto y la participación en los partidos políticos son las formas más inclusivas de participación democrática (135). Asimismo, las normas han introducido canales adicionales de participación (136). La democratización del sistema judicial es otro paso más para asegurar la participación en el proceso de políticas públicas, ya que permite que diferentes grupos tengan el poder de tomar decisiones que reflejen la diversidad de intereses existentes en la sociedad (137). Sin embargo, los nuevos canales disponibles para participar aumentan la necesidad de un sistema educativo que capacite a las personas con habilidades para comprender y usar esos canales.

III.2. Evidencia empírica

Las normas brindan opciones para que las personas participen en el proceso de políticas públicas y ejerzan la participación democrática. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que esas opciones no son concebidas regularmente por las víctimas. Solo una víctima que menciona ser miembro de un partido político participa en el proceso de políticas públicas. Esta víctima tiene dos características únicas si se la compara con otras víctimas de la muestra: es abogada y su área de especialización es la violencia doméstica (138). Ella trabaja con casos de violencia doméstica todos los días y se siente comprometida con sus clientes. Trabaja en un proyecto de ley que recomienda sanciones penales más fuertes en los casos de violación de medidas preventivas y la creación de un Ministerio para la Familia. Esta Víctima entiende los problemas, luchas y riesgos que enfrentan las víctimas cuando acceden a la justicia. Los resultados de este estudio observan que la comprensión del tema y la relación diaria con él podrían asociarse con las posibilidades de ejercer la participación en el proceso de políticas públicas.

La terminología legal aparece como un obstáculo para la comprensión, y los folletos o información escrita no son recordados por las víctimas. Por ejemplo, las víctimas no recuerdan que en las entrevistas con los proveedores judiciales se les ha mencionado sus derechos. Aquellas que recuerdan haber recibido un folleto, tampoco recuerdan la información que leyeron. Sin embargo, puede percibirse que las herramientas visuales, como la referencia a noticias de la televisión con imágenes en lugar de palabras, pueden ser más apropiadas para una transmisión efectiva de la información (por ejemplo, maquetas para representar una escena en el procedimiento legal, historias cortas en papel o computadora para personificar una escena con consejos sobre cómo presentar una denuncia y qué hacer a partir de ahí).

La evidencia empírica muestra que incluso cuando no participan en el proceso de políticas públicas, las víctimas se convierten en miembros activos al crear conocimiento en otras víctimas. Las víctimas mencionan que, al compartir sus experiencias con otras víctimas, comparten también sus recomendaciones de cómo enfrentar el problema y cómo superarlo. Esta comunicación les hace sentir que no están solas ante la problemática (139). Las víctimas mencionan durante las entrevistas una red de transmisión de información. Algunas víctimas presentan sus denuncias porque otras víctimas les recomendaron hacerlo (140); otras víctimas inician el camino de acceso a justicia de otras víctimas con la mera recomendación de que deben denunciar al abusador (141); y aquellas que no tuvieron la posibilidad de contactarse con alguien en su misma situación, dicen que, de encontrarse, les recomendarían presentar una denuncia (142). Solo una víctima, que es abogada especializada en derecho comercial, dice no saber qué recomendación le daría a otra persona en su misma situación, y menciona que una amiga que también sufrió hostigamiento consultó a un juez amigo quien le recomendó que lo amenazara, pero que no presentara una denuncia (143).

El análisis de los expedientes legales que registran el entorno social de las víctimas a fin de evaluar su vulnerabilidad al abuso indica que todas las víctimas, con la excepción de dos, cuentan con el apoyo de alguien de su entorno social. Estos resultados podrían decir algo sobre las características de las víctimas que presentan denuncias: la mayoría cuenta con apoyo afectivo (al menos de una persona). Las víctimas que denuncian recurren a su entorno social, principalmente a aquellos con quienes han compartido sus experiencias y que pueden ayudarlas en caso de necesitarlo. Este entorno social abarca: familiares, amigos, psicólogos, abogados y/o colegas (144). Durante las segundas entrevistas, se les preguntó nuevamente a las víctimas sobre sus entornos sociales y hasta qué punto hablaron o recibieron apoyo de ellos durante los meses transcurridos entre la primera y la segunda entrevista. Las víctimas expresan haber hablado con colegas sobre sus denuncias (145), creado un nuevo grupo de amigos (146), retomado la comunicación con antiguos amigos (147), y hablado con miembros de la familia (148). Por lo tanto, existe evidencia que indica que las víctimas que acceden a la justicia se apoyan en y comparten información con su entorno social.

Las víctimas muestran empatía por otras víctimas. Durante las entrevistas, se les preguntó qué aprendieron o qué les sorprendió más de su primer contacto con la justicia (llámese, comisaría, Oficina de Violencia Doméstica, Ministerio Público Fiscal). Muchas de las víctimas que accedieron a través de la Oficina de Violencia Doméstica mencionan que lo que más les sorprende es la cantidad de mujeres que sufren el mismo problema. Las víctimas reconocen eso como una experiencia de aprendizaje. La empatía y la sensación positiva de compartir podrían resultar en la participación en el proceso de políticas públicas, si a esas víctimas, ahora agrupadas, se les presenta la posibilidad de participar.

Las acciones mencionadas anteriormente pueden tener el potencial de impulsar la participación en el proceso de políticas públicas a través de asociaciones voluntarias. No obstante, solo una víctima expresa un deseo general de trabajar con otras víctimas y ayudarlas con sus problemas (149). Esta víctima es joven y activa (menciona haberse informado sobre sus derechos a través de libros e Internet), y su madre es abogada y trabaja en un consulado. Las otras víctimas no expresan un deseo o contemplan incluso la posibilidad de asociarse con otras víctimas. Sin embargo, existe la posibilidad de que con el tiempo estas víctimas encuentren un camino para asociarse y juntas utilicen canales para participar en el proceso de políticas públicas. El diseño de espacios físicos y virtuales para que las Víctimas se reúnan podría actuar como una iniciativa de política pública para impulsar la agrupación y así desencadenar la participación.

Compartir experiencias con pares y aprender sobre las luchas ajenas podrían considerarse formas de desencadenar el conocimiento de derechos. Se puede llegar a esta conclusión después de observar que las víctimas perciben la sala de espera como un espacio donde reconocer que otras mujeres enfrentan situaciones similares (150). Ellas manifiestan que en la sala de espera se dan cuenta de que no son las únicas que se enfrentan a este problema. Algunas víctimas incluso perciben un sentido de pertenencia a un grupo y muchas mencionan la sorpresa que les generó la cantidad de mujeres en la sala de espera (151). Por lo tanto, las características de la sala de espera (es decir, la transferencia de información de igual a igual), parece ser otra herramienta poderosa para desencadenar la participación. La inclusión de herramientas en los espacios donde las víctimas se reúnen (como son las salas de espera) podría aumentar la efectiva participación democrática al ayudar a las víctimas a visualizar su capacidad de participación.

El rechazo social a la violencia expresada por los medios de comunicación también se muestra como parte del proceso de conocimiento de los derechos. El entorno social de las víctimas también se percibe como un transmisor de información que aparece en los medios, información legal y experiencias personales. Por ejemplo, una víctima explica que, a través de su hija, refiriendo a una nota en la televisión, supo que en Bolivia también hubo manifestaciones de mujeres que pedían penas de cárcel para hombres que cometían actos de violencia doméstica (152). Otra víctima manifiesta que, aunque no puede recordarlos, su hermana, quien es abogada, le explicó sus derechos (153). Otra víctima menciona no haberse sentido sorprendida con respecto a la información dada por los proveedores judiciales porque, dos amigas que habían experimentado una situación similar ya habían compartido con ella los pasos que siguieron y cómo se sintieron (154). Las víctimas que recibieron información a través de su entorno social son percibidas con mayor seguridad respecto a cómo enfrentan el procedimiento legal. Una víctima expresa cómo su conversación con la ex novia del acusado reafirmó su decisión de denunciarlo:

"Y, digo, bueno, sola, esto sola no se puede. No puedo sola, necesito un batallón de gente atrás mío que me ayude, porque sola no puedo. Y la ex novia [del acusado] me decía que sí, que tengo razón, que la única manera de terminar una relación con él es de esta forma [refiriéndose a la denuncia], ¿no? No hablando" (155).

Las víctimas sienten que no tienen derecho de reclamarles a los proveedores judiciales. Luego de presentar la denuncia las víctimas se mantienen pasivas y esperan a que los proveedores judiciales las llamen y les indiquen qué hacer. Es raro que una víctima se sienta con el derecho de solicitar una acción determinada por parte de los proveedores judiciales. Solo una víctima expresa haberse dirigido al tribunal y solicitar una actualización sobre su caso (156), y la única víctima masculina de la muestra expresa haber recurrido al Ministerio Público Fiscal, aún sin tener una cita, para pedir información sobre su causa (157). La falta de participación está vinculada a la falta de información asimilable que se les da a las víctimas con respecto a las posibilidades que tienen de participar en el proceso.

Estas observaciones empíricas sobre la falta de participación de las víctimas en el procedimiento legal y en el proceso de políticas públicas también pueden explicarse por el papel que las víctimas perciben que tienen en estos procesos. Durante las primeras entrevistas se formuló a las víctimas una pregunta abierta para comprender cómo se posicionaban en relación con el problema. Con este fin, se les preguntó de quién pensaba que dependía la solución a su problema. Las siguientes categorías fueron identificadas en sus respuestas:

Tabla 1. Solución a los problemas

¿De quién crees que depende la solución de tu problema?					
Sistema judicial	Yo y ...	Él	Yo	Sistema judicial y ...	Diseño de las políticas
14	15	10	9	1	1

La mayoría de las víctimas, durante las primeras entrevistas, creen que la solución a sus problemas depende en cierta medida de ellas ("Yo y ..." y "Yo"). Las víctimas que afirman que la solución solo depende de ellas ("Yo") siguen en número a quienes creen que la solución depende solo del sistema judicial ("Sistema judicial") y solo del acusado ("Él"). Por último, una víctima cree que la solución a su problema depende del sistema judicial y de otra persona ("Sistema judicial y ..."); mientras que otra víctima cree que depende de la forma en que se diseñan las políticas públicas ("Diseño de políticas").

Las víctimas que mencionan que la solución a sus problemas depende únicamente de ellas se refieren a su proactividad para buscar ayuda, cómo materializar la motivación inicial para actuar (es decir, la presentación de la denuncia) y su capacidad para estar al día con el procedimiento legal, respondiendo a los diferentes requerimientos de los proveedores (judiciales) (158). Algunas víctimas añaden que también les ayuda aprender a controlar sus emociones y estar menos nerviosas (159) y a tomar decisiones más holísticas en miras del tipo de vida que desean tener (160) ["como me dijo mi psicólogo" (161)]. Otra víctima focaliza su respuesta en el acusado, afirmando que depende de su capacidad para mostrarle al acusado que sus intenciones no son confrontarlo sino resolver el problema (162).

A algunas víctimas se les formuló una pregunta cerrada durante las segundas entrevistas para determinar hasta qué punto pensaban que lo sucedido en su procedimiento legal hasta esa fecha dependía exclusivamente de ellas. Ninguna víctima se percibe a sí misma como una parte importante del procedimiento legal. Algunas afirman que, en parte o en gran medida, dependía de ellas, porque se atrevieron o tuvieron el valor de formalizar una denuncia (163) y exteriorizar la violencia doméstica (164). Otras víctimas expresan que dependía de ellas en la medida en que debían hacer lo requerido y proporcionar la información peticionada (165), en algunos casos con la ayuda de sus abogados (166).

Varias víctimas no se ubican dentro del espectro de factores responsables de la solución a sus problemas. A este grupo se le hizo una pregunta de seguimiento para comprender cómo perciben su rol en la búsqueda de una solución a sus problemas. Algunas víctimas expresan roles que exigen acción personal (por ejemplo, presentar denuncias y visitar psicólogos) (167) y otras expresan roles que exigen responder a los requisitos de las diferentes organizaciones (por ejemplo, testificar, presentar testigos, participar en la mediación y transcribir mensajes de texto) (168).

La presentación de denuncias y la respuesta a las solicitudes del sistema judicial son actos que en sí mismos exigen un empoderamiento legal. Sin embargo, después de esta primera acción, incluso en los casos en que las víctimas se posicionaron como las principales partes responsables de la solución de sus problemas, tienden a considerar que esa responsabilidad se materializa al presentar la denuncia. Ninguna de ellas comentó momentos posteriores en los que estuvieran participando del procedimiento. En su mayoría, permanecieron pasivas después de la presentación de la denuncia, transfiriendo la pertenencia del conflicto al sistema judicial o a sus abogados.

Una víctima expresa que la solución a su problema depende de un cambio en la forma en que se diseñan las políticas públicas. Ella dice que las políticas públicas de violencia doméstica deben ser diseñadas estratégicamente e implementadas mediante la creación de un Ministerio de la Familia (169). La víctima que trajo a colación el factor de diseño de políticas públicas es la abogada, mencionada anteriormente, quien es especialista en casos de violencia doméstica y participa en un partido político y en el desarrollo de una propuesta de ley para mejorar las políticas sobre violencia doméstica.

Se preguntó a algunas víctimas (después de seis meses) en qué medida se sintieron en control del procedimiento legal durante aquellos meses. Algunas víctimas manifiestan estar manejando mejor los problemas y abordando las cosas paso a paso (170), mientras que otras se sienten en control porque son quienes proveen la información cada vez que se les requiere (171) y porque la mayoría de las acciones dependen de ellas (172). Una víctima expresa ser capaz de controlar sus actividades diarias para protegerse a sí misma (por ejemplo, tener cuidado mientras está en la calle) (173), y otra entrevistada afirma que no podía controlar en absoluto el procedimiento legal porque al ser la víctima se la llamaba principalmente para preguntarle cómo se encontraba (174). Estas respuestas demuestran nuevamente que las víctimas no se sienten con derecho a participar en el procedimiento legal.

IV. Observaciones comparativas

El sistema judicial actúa como puente entre la norma y su conocimiento, y podría verse como agente capaz de gestar la participación democrática. Basándonos en la evidencia empírica, las víctimas utilizan formas alternativas de participación (por ejemplo, compartiendo información entre ellas sobre recursos). Fomentar (y formalizar) estas alternativas puede contribuir a su participación en el proceso de toma de decisiones. En este sentido, se pueden incorporar otras herramientas para traducir la complejidad de la ley en mensajes accesibles para mejorar la participación. Además de recibir información sobre los procedimientos legales para garantizar la participación, las víctimas se beneficiarían de espacios compuestos donde se puedan juntar para compartir experiencias. Esto es así ya que ellas demuestran mayor capacidad de aprender de sus pares y su entorno social, que de sus proveedores judiciales. Por ejemplo, se podrían implementar blogs para que las víctimas se comuniquen de forma anónima y programen reuniones semanales. Esto canalizaría la participación voluntaria y la promoción al intercambio de experiencias y estrategias emprendidas para superar el problema. Esto no solo contribuye al empoderamiento legal de las víctimas, sino que también podría generar grupos que terminen participando y contribuyendo a la eficacia de las políticas públicas.

Las organizaciones legales, ya sean estatales o no estatales, también pueden contribuir a la participación de las víctimas en el proceso de políticas públicas fomentando el conocimiento de sus derechos. Diferentes jurisdicciones han implementado distintas estrategias para hacerlo, y entender las mejores prácticas contribuye a pensar en acercamientos innovadores y eficientes.

Se presentan a continuación referencias comparativas con el objetivo de ilustrar las iniciativas emprendidas por organizaciones legales en varias jurisdicciones de las Américas, Asia, Australia y Europa:

- Canadá ha creado un Programa de Asistencia para Testigos y víctimas y utiliza maquetas para capacitar a las víctimas antes de que participen en una mediación, audiencia o juicio. Con las maquetas los proveedores recrean el escenario real, representando el espacio físico y los diferentes actores y sus funciones que estarán presentes durante el evento (175). Los proveedores perciben que esta técnica ayuda a las víctimas a ganar confianza en su papel en el procedimiento y, en última instancia, a través del entendimiento, mejoran la participación.

- Canadá y EE. UU. han implementado tribunales integrados de violencia doméstica para centralizar las denuncias legales y la prestación de asistencia (176). Consideran que los tribunales integrados aceleran el procedimiento y permiten un enfoque holístico del conflicto. Bajo esta estructura los jueces aún tienen un rol central y las partes, incluso cuando son convocadas a un procedimiento oral, pueden expresarse de manera limitada.

- EE. UU. y los Países Bajos han introducido mecanismos para permitir el uso de los derechos al completar personalmente formularios redactados con antelación (por ejemplo, órdenes de protección, acuerdos privados) o mediante la creación de plataformas virtuales para que las víctimas puedan ejercer sus derechos con la asistencia de instrucciones que incluyan opciones y mecanismos para evaluar dichas opciones. Por ejemplo, en Luisiana y California (EE. UU.) se han implementado "mesas de autoayuda". Estas mesas están a cargo de abogados, estudiantes de derecho y/o asistentes legales y ayudan a las personas a completar los formularios previamente redactados. Estos formularios serán presentados por las víctimas ante los tribunales con vistas a ejercer sus derechos (177).

- Buenos Aires, tal como se mencionó anteriormente, ha implementado una estrategia donde las denuncias y su seguimiento se puede realizar mediante la descarga de una aplicación (178), por teléfono (# 147) o en Facebook (179). Otros ejemplos se encuentran en ciudades como Rotterdam, Sídney, Lima, Madrid y Delhi, que han lanzado aplicaciones que son utilizadas por las víctimas de discriminación sexual para informar sobre la ubicación donde ha ocurrido la contravención o delito (180). La tecnología se percibe como la herramienta más efectiva e inclusiva para facilitar la comunicación de las organizaciones legales con las personas y de las personas con sus pares.

- Francia tiene una tradición de lucha por los derechos de las mujeres a la participación democrática a través de movimientos bottom-up. Fue el primer país en nombrar a una jueza en 1946 (181), y donde ocurrió el caso emblemático de Olimpia de Gouges. De Gouges fue ejecutada en 1793 en la guillotina por solicitar el otorgamiento de derechos ciudadanos para las mujeres y por olvidar las virtudes de su sexo y pretender participar en temas de la República. Francia incorporó recientemente un Ministerio de Derechos de la Mujer a su estructura gubernamental. El cambio se atribuye a la lucha de las organizaciones no gubernamentales en particular y de las organizaciones en general. Entrevistas a los proveedores en la Ciudad, a diferencia de las que se realizaron en Francia para este estudio, no reconocen que los movimientos feministas consolidados hayan provocado cambios (182).

Los mecanismos apropiados para mejorar el conocimiento de derechos contribuyen a la participación de las personas que experimentan el procedimiento legal y al entorno social de ellas. La expansión del conocimiento a través de la transmisión de información no tiene barreras y esto puede fomentarse con la implementación de espacios donde las personas puedan reunirse. Las organizaciones legales son herramientas importantes para que las personas tomen conocimiento de sus derechos mediante la implementación de estrategias de comunicación adecuadas. Tienen los medios para promover campañas que fomenten al conocimiento de derechos y el poder para organizar la cooperación entre las distintas organizaciones que trabajan para la misma causa. Por lo tanto, las organizaciones legales pueden contribuir al ejercicio del derecho de participación democrática mediante la implementación de técnicas que fomenten el conocimiento de los derechos y la creación de espacios donde las personas puedan recopilar y compartir información, experiencias e iniciativas.

Se necesitan más estudios para mapear las mejores prácticas implementadas en otras jurisdicciones a fin de asegurar la participación de las partes en el procedimiento a través de técnicas que mejoren el conocimiento de derechos. Los ejemplos mencionados en este estudio fueron mencionados como efectivos por los proveedores. Existe sin embargo una falta de comprensión respecto hasta qué punto las víctimas los consideran útiles.

V. Reflexiones finales

Las normas han introducido nuevas formas de participación democrática, sin embargo, pocos miembros de la sociedad utilizan estos derechos. Este estudio demuestra que la falta de ejercicio del derecho a la participación democrática está directamente relacionada con el escaso conocimiento de estos, y la falta de adaptación del mensaje a las características de los diferentes individuos (es decir, un acercamiento inclusivo a la transmisión de conocimiento). Esto se demuestra por la evidencia empírica que refleja una falta de conocimiento y participación de las víctimas durante su procedimiento legal. Al mismo tiempo, este estudio sostiene que incluso cuando las víctimas no participan en el proceso de toma de decisiones a nivel organizativo, sí participan en el proceso de toma de decisiones entre sus pares. Las víctimas comparten, entre ellas, información sobre sus derechos y sobre las organizaciones legales disponibles para reclamar tales derechos. Este resultado da pautas para creer que las víctimas, con el tiempo, pueden formar parte de movimientos bottom-up y, a través de ellos, hacer valer su derecho a la participación democrática haciendo uso de los nuevos canales disponibles en las normas. Sin embargo, se necesita un sistema judicial que colabore con los poderes ejecutivo y legislativo y con el tercer sector para que se implementen políticas públicas que mejoren el conocimiento de los derechos de la población.

El conocimiento de los derechos aumenta cuando la información se transfiere de manera efectiva. Las organizaciones legales desempeñan un papel clave, ya que tienen la capacidad de transferir información de manera precisa a quienes han obtenido acceso a la justicia. Actúan como puentes entre la norma y su conocimiento y podrían verse como gestores de la participación democrática.

(*) Este estudio aborda una subpregunta de investigación de la tesis doctoral de la autora que estudia de qué manera el acceso a la justicia empodera legalmente a las víctimas de violencia doméstica. La investigación realizada en la Universidad de Maastricht/Universidad de Naciones Unidas-MERIT, se encuentra disponible en su versión electrónica y en inglés en www.merit.unu.edu/training/theses/marotta_julieta.pdf.

(1) MAROTTA, Julieta, "Access to Justice and Legal Empowerment of Victims of Domestic Violence through Legal Organisations in the City of Buenos Aires: A Qualitative Empirical Legal Study", tesis doctoral, 2017, cap. 6.3; VAN DE MEENE, Ineke - VAN ROOIJ, Benjamin, "Access to Justice and Legal Empowerment. Making the Poor Central in Legal Development Co-Operation", Leiden University Press; Países Bajos, 2008, 6-8.

(2) Ibidem, 4.

(3) FRIEDMANN, John, "Empowerment: The Politics of an Alternative Development", Graduate School of Architecture and Urban Planning, University of California, 1990, 66-71.

(4) BRUCE, John W. et al., "Legal Empowerment of the Poor: From Concepts to Assessment", U.S. Agency for International Development, 2007, 11-16.

(5) Ibidem, 11, 35-37.

(6) Ibidem, 11.

(7) Ibidem

(8) Ibidem, 17.

(9) Ibidem, 11.

(10) Ibidem, 12.

- (11) Ibidem, 9-10, 12-17, 35.
- (12) Ibidem, 12.
- (13) VAN DE MEENE, Ineke - VAN ROOIJ, Benjamin, ob. cit., 29.
- (14) BRUCE, John et al., ob. cit., 12, 14-16, 35; Commission on Legal Empowerment of the Poor, "Making the Law Work for Everyone. Vol. I", 43; GRAMATIKOV, Martin - PORTER, Robert, "Yes, I Can: Subjective Legal Empowerment", TISCO Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Systems No. 008/2010; Tilburg Law School Research Paper No. 023/2010, 26-27.
- (15) BRUCE, John et al., ob. cit., 13, 20-21, 35; MACDONALD, Roderick A., "Access to Civil Justice", Ed. Peter Cane and Herbert M. Kritzer, 2010, 512-13; VAN DE MEENE, Ineke - VAN ROOIJ, Benjamin, ob. cit., 9-11.
- (16) Commission on Legal Empowerment of the Poor, ob. cit., sec. prólogo.
- (17) VAN DE MEENE, Ineke - VAN ROOIJ, Benjamin, ob. cit., 10; Commission on Legal Empowerment of the Poor, ob. cit., 5.
- (18) CHRISTIE, "Conflicts as Property", 1-2.
- (19) Commission on Legal Empowerment of the Poor, ob. cit., 44.
- (20) BRUCE, John et al., ob. cit., 13.
- (21) Ibidem
- (22) Ibidem, 17, 20-21, 35; VAN DE MEENE, Ineke - VAN ROOIJ, Benjamin, ob. cit., 9-11.
- (23) BRUCE, John et al., ob. cit., 17.
- (24) Ibidem, 20-21; VAN DE MEENE, Ineke - VAN ROOIJ, Benjamin, ob. cit., 9-11.
- (25) MACDONALD, Roderick A., ob. cit., 510-15.
- (26) BRUCE, John et al., ob. cit., 30.
- (27) Ibidem, 22-23.
- (28) Ibidem, 24-25, 27, 36; VAN DE MEENE, Ineke - VAN ROOIJ, Benjamin, ob. cit., 10-11, 15-16.
- (29) BRUCE, John et al., ob. cit., 25; Commission on Legal Empowerment of the Poor, ob. cit., 46; VAN DE MEENE, Ineke - VAN ROOIJ, Benjamin, ob. cit., 14.
- (30) MÉNDEZ, Juan E., "El acceso a la Justicia, un enfoque desde los Derechos Humanos", Ed. Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2000, 16.
- (31) El art. 31 otorga supremacía a la Constitución Nacional sobre otras leyes y el art. 75 [22] extiende dicha supremacía a algunos tratados internacionales.
- (32) El art. 75 [22] incorpora una lista de tratados de derechos humanos con supremacía constitucional. Asimismo, establece el procedimiento para la posterior aprobación de los tratados internacionales. Los tratados de derechos humanos que no alcanzan la supremacía constitucional se mantienen, jerárquicamente, por encima de la ley federal, véase GELLI, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina: comentada y concordada", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2018, 591-97.
- (33) Para un análisis sobre la manera en que el derecho internacional influyó en la ley 26.485, véase MEDINA, Graciela — YUBA, Gabriela - GONZÁLEZ MAGAÑA, Ignacio, "Violencia de género y violencia doméstica", Rubinzal- Culzoni, 2013, 11-288.
- (34) MÉNDEZ, Juan E., ob. cit., 16.
- (35) La capacidad de autonomía permite al Ministerio Público Fiscal regular su organización y funcionamiento internos. La capacidad de autarquía permite que el Ministerio Público Fiscal establezca normas administrativas y financieras. Constitución de la Ciudad, art. 124; QUIROGA LAVIÉ, Humberto, "Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comentada", Rubinzal-Culzoni Editores, 2013, 354.
- (36) Se catalogan como casos de violencia doméstica a los delitos de "amenazas" y contravenciones de "hostigamiento" cometidas contra una persona con quien existe una relación íntima o por otro miembro de la familia. Véase, Cód. Penal de la Nación, art. 149 bis; Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 52; Resolución del Ministerio Público Fiscal FG N 16/2010.
- (37) Las características de la muestra se encuentran disponibles en MAROTTA, Julieta, ob. cit., 29-31; 259-66.

(38) La lista de preguntas y la matriz utilizada como punto de partida para analizar los datos están disponibles en: Ibidem Annexes 1, 3, 7.

(39) MACDONALD, Roderick A., ob. cit., 498-501.

(40) Para la codificación y el análisis de datos, este estudio se basó principalmente en las siguientes fuentes: BRYMAN, Alan "Social Research Methods", Oxford University Press, 4ta. ed., 2012; KING, Gary — KEOHANE, Robert — VERBA, Sidney, "Designing Social Inquiry; Oppenheim, Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement"; RUBIN, H. — RUBIN, I., "Qualitative Interviewing; Wolcott, Writing up Qualitative Research; Yin, Case Study Research Design and Methods, 2005.

(41) WEBLEY, Lisa, "Qualitative Approaches to Empirical Legal Research", Oxford University Press, 2010, 941-42.

(42) Véase MAROTTA, Julieta, ob. cit., annexes 1 & 3.

(43) GELLI, María Angélica, ob. cit., 16-17. Véase el comentario al art. 14 bis sobre el derecho de los trabajadores a formar parte de un sindicato de manera libre y democrática, en ibidem 122.

(44) Constitución de la Nación Argentina, art. 36; GELLI, María Angélica, ob. cit., 16, 316-21. Argentina experimentó una historia cíclica de regímenes de facto y gobiernos constitucionales. Las organizaciones nacionales e internacionales "nacieron" como observadoras de los eventos gubernamentales, con el objetivo de generar conciencia sobre la responsabilidad de las personas en la formación de un país democrático, véase DOCKERY, Tim, "The Rule of Law over the Law of Rulers: The Treatment of de Facto Laws in Argentina", Fordham International Law Journal, 1995, 1596-1604.

(45) Constitución de la Nación Argentina, art. 38; GELLI, María Angélica, ob. cit., 16, 331-55.

(46) Constitución de la Nación Argentina, art. 75 [19]; GELLI, María Angélica, ob. cit., 16, 578-88.

(47) Constitución de la Nación Argentina, art. 75 [24]; GELLI, María Angélica, ob. cit., 16, 599-602.

(48) Constitución de la Nación Argentina, art. 1º.

(49) Ibidem, art. 22.

(50) GELLI, María Angélica, ob. cit., 322.

(51) Las mujeres obtuvieron derechos políticos en 1947 con la promulgación de la ley 13.010.

(52) Constitución de la Nación Argentina, art. 37.

(53) Ibidem, art. 37. Véase la nota sobre los aspectos positivos y negativos de la aceptación de acciones positivas a nivel constitucional en GELLI, María Angélica, ob. cit., 330 y nota al pie 956.

(54) Sobre los derechos políticos de los ciudadanos, véase Constitución de la Nación Argentina, art. 37.

(55) Ibidem, art. 38. La ley 23.298, sancionada en 1985 (antes de la introducción del art. 38 de la CN en 1994), presenta los principios generales, los requisitos y las condiciones para la creación de partidos políticos, véase Ley Orgánica de los Partidos Políticos; GELLI, María Angélica, ob. cit., 331-55.

(56) GELLI, María Angélica, ob. cit., 321-31, 334-36, 351-55.

(57) La forma del sistema electoral se conoce como "D'Hondt". El sistema asigna candidatos en función del número de votos que recibe cada lista, véase Código Electoral Nacional tít. VII.

(58) Constitución de la Nación Argentina, art. 37.

(59) El deber de votar ha existido en Argentina desde 1912 con la promulgación de la ley 8871 (conocida como Ley Sáenz Peña), que fue enmendada por el Código Electoral Nacional. El art. 12 aborda el deber de votar.

(60) Ibidem, art. 64 bis sobre campañas electorales.

(61) Ibidem, arts. 125-126.

(62) Ibidem, art. 18.

(63) Justicia Nacional Electoral, "Registro de infractores al deber de votar". Los mecanismos implementados para hacer cumplir estas sanciones dependen del ejecutivo. Durante algunos períodos políticos se sabía que el deber de votar no se hacía cumplir; mientras que, durante otros, el ejecutivo asignó recursos para imponer sanciones, generando una carga muy costosa para el Estado, véase GELLI, María Angélica, ob. cit., 329.

(64) UNTS, Pacto de San José, art. 23 (1.a) (1.c).

- (65) Constitución de la Nación Argentina, art. 39.
- (66) Ibidem, art. 40.
- (67) Ibidem, art. 39.
- (68) &It;Ibidem, art. 40; GELLI, María Angélica, ob. cit., 16-17, 358-60.
- (69) OEA, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 20.
- (70) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 999 UNTS 171 (1976), art. 14 [1]; UNTS, Pacto de San José, art. 8° [5].
- (71) Constitución de la Nación Argentina, art. 14.
- (72) Ibidem, art. 75 [19]; GELLI, María Angélica, ob. cit., 578-84.
- (73) Commission on Legal Empowerment of the Poor, ob. cit., 44.
- (74) Constitución de la Nación Argentina, art. 75[19].
- (75) GELLI, María Angélica, ob. cit., 110-15.
- (76) Observación General N.º 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales citado en MEDINA, Graciela — YUBA, Gabriela - GONZÁLEZ MAGAÑA, Ignacio, ob. cit., 456-57.
- (77) MEDINA, Graciela — YUBA, Gabriela - GONZÁLEZ MAGAÑA, Ignacio, ob. cit., 441.
- (78) Para un análisis del acceso a la información sobre salud reproductiva, véase ibidem, 441-52.
- (79) QUIROGA LAVIÉ, Humberto, ob. cit., 45; GELLI, María Angélica, ob. cit., 22, 299-302.
- (80) Constitución de la Ciudad, art. 14.
- (81) Constitución de la Ciudad, arts. 42, 43; GELLI, María Angélica, ob. cit., 104-5.
- (82) Constitución de la Nación Argentina, art. 14; GELLI, María Angélica, ob. cit., 82-83.
- (83) GELLI, María Angélica, ob. cit., 88-89.
- (84) Secretaría General Organización de los Estados Americanos, "Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas", párr. 115, nota a pie de p. 155.
- (85) Ley 24.012 de Cupo; FLORES, María Teresa, "Women's Human Rights in the Framework of Argentine Domestic Law: Treatment since the Return to Democracy", American University Journal of Gender, Social Policy & the Law 7, no.2 (1999), 336-337.
- (86) Constitución de la Nación Argentina, art. 37.
- (87) DALLA VÍA, Alberto, "La protección de las minorías en el campo de los derechos políticos", 49.
- (88) Secretaría General Organización de los Estados Americanos, "Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas", párr. 103.
- (89) Ley 27.412. de Paridad de Género en el Ámbito de Representación Política.
- (90) En 1991, una Ley de Cuotas de Género obligó a diferentes sectores a incluir la representación de las mujeres. Tres años después, se adoptó la ley 24.417 contra la violencia doméstica, siendo la primera de su tipo a nivel federal. Desde 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha tenido dos juezas mujeres de un total de nueve jueces [Carmen María Argibay (2005) y Elena Highton de Nolasco (2004)]. Asimismo, el sistema judicial (excluyendo la Corte Suprema y Ministerio Público Fiscal) tiene una representación del 54% de mujeres y del 46% de hombres, y en el Congreso casi el 40% de los miembros son mujeres. Roberto Gargarella argumenta que los jueces "tienden a gobernar en beneficio de su propia clase, grupo racial o grupo social en particular", véase GARGARELLA, Roberto, "'Too Far Removed from the People' Access to Justice for the Poor: The Case of Latin America", Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 2004, 9.
- (91) El Senado juzga a los funcionarios públicos durante los juicios públicos, mientras que la Cámara de Diputados los somete a juicio político, véase Constitución de la Nación Argentina, art. 59; GELLI, María Angélica, ob. cit., 485-87.
- (92) Dec. regl. 1172/2003.
- (93) Véanse, por ejemplo, las pautas diseñadas por una organización para combatir la corrupción en, Oficina Anticorrupción, "Herramientas para la transparencia en la gestión. Participación ciudadana".
- (94) Para información sobre cómo solicitar o participar en audiencias públicas, véase dec. regl. 1172/2003.
- (95) Ley 26.485, art. 16(g).

(96) Ibidem, art. 36.

(97) Constitución de la Nación Argentina, art. 100; GELLI, María Angélica, ob. cit., 728.

(98) Constitución de la Nación Argentina, art. 100.

(99) El defensor del pueblo tiene una función preventiva y reparadora y, dentro de su función reparadora, puede presentar un recurso de amparo para proteger los derechos de los participantes de una incidencia colectiva. El recurso de amparo se aborda en el art. 43 de la CN y establece que las personas que han sido objeto de discriminación pueden "interponer una acción expedita y rápida". El recurso de amparo proporciona una herramienta para ejercer el derecho a una vida sin discriminación cuando no se dispone de otro recurso legal adecuado, y puede ser solicitado por los individuos, el defensor del pueblo, las ONG y el Procurador General de la Nación. Para obtener más información sobre el recurso de amparo y el defensor del pueblo en Argentina, véase REIF, "Building Democratic Institutions", 62; GELLI, María Angélica, ob. cit., 25, 387-406.

(100) JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, "Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia".

(101) El juicio por jurado contribuye a la transparencia ya que las decisiones se toman como resultado de la participación popular, a la vez que estimulan aún más los debates sociales. La Constitución Nacional, desde su texto original de 1853, incluye una disposición legal, inspirada en la Constitución de los EE. UU., que otorga al Congreso el deber de establecer un juicio con jurado. El Congreso, sin embargo, no legisló sobre esta disposición. Por lo tanto, pese a estar reconocida durante casi dos siglos, las diferentes generaciones de legisladores no han materializado ese precepto constitucional. El juicio por jurado, tal como está incorporado en la Constitución Nacional, solo puede ser considerado para asuntos penales (excluidos los juicios políticos). Este último texto constitucional no reconoce el valor del juicio por jurado para asuntos civiles, sin embargo, los académicos siguen recomendando los juicios por jurado en materia civil como una forma de democratizar las decisiones judiciales, véase AAJJ, "Asociación Argentina de Juicio por Jurados"; AAJJ, "Declaración de principios de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados". Constitución de la Nación Argentina, arts. 24, 75 [12] [antiguo 67 [11]], 118 [antiguo 102]; GARGARELLA, Roberto, ob. cit., 7-8.

(102) Constitución de la Ciudad, art. 1°.

(103) Ibidem, art. 1°.

(104) Ibidem, art. 62.

(105) Ibidem, art. 61.

(106) Ibidem, arts. 61-62.

(107) Ibidem, art. 67.

(108) Ibidem, art. 64.

(109) GELLI, María Angélica, ob. cit., 901, citando el argumento de Sagiés.

(110) Constitución de la Ciudad, arts. 13 [3] y 81 [2].

(111) CEVASCO, Luis, "Derecho procesal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, 55.

(112) Ibidem, 55-58.

(113) Constitución de la Ciudad, art. 61.

(114) Ibidem, art. 62.

(115) Constitución de la Ciudad, art. 12[2].

(116) Sobre el derecho a la información, la comunicación y la libertad de prensa, véase la observación de QUIROGA LAVIÉ, Humberto, ob. cit., 45-47.

(117) Por ejemplo, Buenos Aires Ciudad, "Audiencias Públicas"

(118) Por ejemplo, "Gestión Comunal y Atención Ciudadana"

(119) Ley 104.

(120) Ibidem.

(121) Ibidem, art. 104.

(122) Resolución del Ministerio Público Fiscal FG N 162/2008 citando la obra de Miguel Ángel Ekmekdjian.

(123) Ley 310, art. 2°.

(124) Constitución de la Ciudad, art. 19; ley 310, 310; Buenos Aires Ciudad, "Consejo de Planeamiento Estratégico".

(125) Para participar en el Consejo de Planificación Estratégica, las organizaciones tienen que representar al trabajo, la producción, la religión, la cultura, la educación, los partidos políticos u otras ONG que se desempeñan dentro del territorio de la Ciudad, véase ibidem, art. 3°; una lista de las organizaciones consultadas por el Consejo de Planificación Estratégica está disponible en "Organizaciones". Asimismo, los formularios de registro están disponibles online y en el Consejo de Planificación Estratégica, "Formulario de Inscripción en el Registro de Entidades del CoPE".

(126) Constitución de la Ciudad, art. 19.

(127) Ibidem, art. 64.

(128) Para obtener más información sobre cómo participar en audiencias públicas en la Ciudad, véase BUENOS AIRES CIUDAD, "Audiencias Públicas".

(129) Constitución de la Ciudad, art. 65.

(130) BUENOS AIRES CIUDAD, "Comunas".

(131) Las mesas barriales, por lo tanto, proporcionan un espacio de comunicación entre el Estado y la comunidad (también se puede invitar a la policía a participar). Su objetivo es la elaboración de estrategias preventivas contra la violencia y el delito, la evaluación de las acciones realizadas para abordar los problemas y el diseño de actividades para promover y difundir estrategias preventivas. Resolución 296/2011: Mesas Barriales; Ministerio de Seguridad, "Mesas Barriales".

(132) BUENOS AIRES CIUDAD, "Línea B: Instalamos nuevas terminales de autoconsulta".

(133) BUENOS AIRES CIUDAD, "BA 147 (App)". Otra aplicación está disponible para que las personas presenten denuncias sobre infracciones de tránsito (por ejemplo, estacionarse en lugares no autorizados, detenerse en la senda peatonal), véase BUENOS AIRES CIUDAD, "BA Denuncia Vial (App)".

(134) BUENOS AIRES CIUDAD, "BA 147 (Facebook)"

(135) La Constitución Nacional contempla formas ortodoxas de participación democrática. Los votos y los partidos políticos eran canales tradicionales de participación reconocidos por la Constitución Nacional; mientras que en 1994 se introdujeron la participación semi-directa y la consulta popular.

(136) Por ejemplo, el defensor del pueblo, las audiencias públicas, las mesas barriales; y, las plataformas electrónicas, aplicaciones y líneas telefónicas.

(137) Por ejemplo, las leyes de cuotas de género y el juicio por jurado introducido por la Constitución Nacional y la de la Ciudad.

(138) VI 1, 032.

(139) VI 1, 041.

(140) VI 1, 012; VI 1, 015; VI 1, 026.

(141) Las víctimas recomendaron, en forma general, la presentación de una denuncia, y aquellas que especifican el lugar, mencionaron a la policía y la Oficina de Violencia Doméstica, VI 1, 016; VI 1, 017; VI 1, 019; VI 2, 019; VI 1, 026; VI 1, 006; VI 2, 003; VI 2, 034; VI 2, 045 (también recomienda terapia psicológica).

(142) Las víctimas recomendaron, en forma general, la presentación de una denuncia, llamar al 0800 MUJER o ir a la Oficina de Violencia Doméstica, VI 1, 004; VI 1, 025; VI 1, 026; VI 1, 041; VI 2, 035; VI 2, 039.

(143) VI 2, 001.

(144) VI 1, 001 (novio y compañeros de oficina); V-IwSP, 002 (hermanas); V-IwSP, 004 (entorno social); V-IwSP, 011 (familia y dos amigos); V-IwSP, 014 (familia, amigos, psicólogo); V-IwSP, 030 (familia, amigos, psicólogo); V-IwSP, 019 (familia, amigos, psicólogo); V-IwSP, 015 (miembros de la familia); V-IwSP, 026 (amigos); V-IwSP, 023 (familia y esposo); V-IwSP, 021 (familia y amigos); V-IwSP, 024 (familia); V-IwSP, 017 (familia, psicólogo, abogado, amigos); V-IwSP, 018 (familia, amigos, compañeros de oficina); V-IwSP, 033 (familia y compañeros de oficina); V-IwSP, 037 (familia y psicólogo); V-IwSP, 042 (amigos y niños); V-IwSP, 040 (familia y amigos); V-IwSP, 045 (familia y amigos); V-IwSP, 046 (familia); V-IwSP, 052 (esposo, familia, psicólogo); V-IwSP, 054 (familia y amigos); V-IwSP, 053 (familia y amigos); V-IwSP, 034 (familia); V-IwSP, 049 (familia y amigos); V-IwSP, 044 (vecino y amigo, porque la familia vive en Bolivia).

(145) VI 2, 001.

(146) Una víctima manifiesta hablar con nuevos amigos que viven en el mismo refugio y que también sufrieron violencia, VI 2, 007; otra víctima vive en un hotel y comenta que sus vecinos la ayudan tanto como ella los ayuda, se apoyan mutuamente, VI 2, 039.

(147) Una víctima dice tener dos amigas en la provincia de Buenos Aires y que pasó la Navidad con una de ellas, aunque la víctima evitó responder por qué fue a la casa de su amiga a pasar la Navidad. Según los documentos legales, el vecino que fue llamado a testificar declaró no querer involucrarse más en la violencia porque la situación se repite una y otra vez, VI 2, 027; y, finalmente, otra víctima comenta cómo restableció la comunicación con sus amigos después de que la relación con el acusado terminó, VI 2, 052.

(148) VI 2, 029 (recibe ayuda de su hijo); VI 2, 007 (habla con su padre); VI 2, 006 (comparte sus problemas con un hermano en Paraguay, con la madre de su nieta y con su nieta de 11 años); VI 2, 052 (recibe apoyo de su madre).

(149) VI 1, 034; VI 2, 034.

(150) La Oficina de Violencia Doméstica incorporó algunas ideas innovadoras en sus salas de espera (por ejemplo, un televisor) y también consideró la posibilidad de incluir narradores.

(151) VI 1, 002; VI 1, 014; VI 1, 023; VI 1, 026; VI 2, 033; VI 1, 042.

(152) VI 1, 013.

(153) VI 1, 017.

(154) VI 1, 015.

(155) VI 1, 050.

(156) VI 1, 007.

(157) V Masculino-I 1, 028.

(158) VI 1, 004; VI 1, 008; VI 1, 050; VI 2, 027.

(159) VI 1, 004.

(160) VI 1, 016; VI 2, 027; VI 1, 030; VI 1, 042; VI 1, 050.

(161) VI 1, 016.

(162) VI 1, 033.

(163) VI 2, 006; VI 2, 031; VI 2, 034; VI 2, 038.

(164) VI 2, 052; V Masculino-I 2, 028.

(165) VI 2, 026; VI 2, 007.

(166) VI 2, 026.

(167) VI 1, 017; VI 2, 053.

(168) VI 1, 003; VI 2, 053; VI 2, 039; VI 2, 041.

(169) VI 1, 032.

(170) VI 2, 037.

(171) Ibidem.

(172) VI 2, 045; VI 2, 051.

(173) VI 2, 051.

(174) VI 2, 043.

(175) SP Canadá, WVAP.

(176) NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE, "New York Integrated Domestic Violence Courts"; Ontario Court of Justice, "Integrated Domestic Violence Court".

(177) Family Court East Baton Rouge, "SelfHelp Desk at the 19th JDC Court House"; California Courts, the Judicial Branch of California, "Online Self-Help Center".

(178) BUENOS AIRES CIUDAD, "BA 147 (App)".

(179) BUENOS AIRES CIUDAD, "BA 147 (Facebook)"

(180) Consulte <https://www.plan.org.au/freetobe>, <https://stopikpraak.nl/>, <http://lima.planfreetobe.org/page/welcome>.

(181) SCHULTZ, Ulrike - SHAW, Gisela, "Gender and Judging", Hart Publishing, 2013, 8.

(182) Funcionario civil del Ministerio de la Mujer de Francia, entrevista en profundidad.